



Más y mejor educación pública para toda la ciudadanía

Concentración frente a la Consejería de Educación
jueves, 17 de mayo de 2007

MANIFIESTO

La educación es un derecho constitucional básico que los poderes públicos deben garantizar y además el primer factor de progreso individual y social. Las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en los últimos años plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta. Estos cambios requieren, entre otras cosas, que las administraciones garanticen a toda la ciudadanía los medios para hacer realidad la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, requieren que se adopten las medidas necesarias para que todas las personas que vivimos y trabajamos en Castilla y León, personas procedentes de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes culturas, aprendamos a convivir.

En lugar de hacer frente a estos nuevos retos, las políticas desarrolladas en estos últimos años han supuesto un deterioro permanente del servicio público de educación. Este permanente deterioro está frustrando las expectativas de futuro de numerosos jóvenes, fundamentalmente de los que finalizan la educación obligatoria sin la cualificación y formación necesaria para su desarrollo personal y profesional, pero también la de aquellos que tras obtener sus titulaciones universitarias se ven obligados a buscar trabajo lejos de sus casas, lo que significa un doble empobrecimiento de nuestra comunidad, pues dedica sus escasos recursos a formar personas cuya valía y conocimientos son utilizados fuera de nuestra comunidad.

Entre los diferentes indicadores que demuestran esta situación se pueden señalar:

- El desaprovechamiento de la oferta pública allá donde existe y en contraste su precaria dotación en los nuevos barrios de las ciudades en expansión.
- Las ratios elevadas en la etapa de educación infantil de 0 a 3 años.
- La falta de apoyo para atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado en aspectos básicos.
- La falta de bibliotecas escolares adecuadas y la escasa introducción de las tecnologías de la información y la comunicación.
- La escasa oferta de los servicios educativos que demandan las familias: ampliar el horario de apertura de más centros, creación de otras modalidades de utilización de los centros abriéndolos a la sociedad y la oferta de actividades complementarias.
- La concentración del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje (especialmente el alumnado de origen inmigrante) en los centros públicos, unido a la falta de apoyos específicos para atender a este alumnado.
- La tardanza en cubrir las bajas del profesorado y del personal de administración y servicios.
- La imagen, que en ocasiones, contribuyen a magnificar los medios de comunicación, de un incremento de la violencia escolar en los centros educativos, con una Administración que debería poner todos los medios a su alcance para la prevención de la violencia escolar y mejora de la convivencia, pero que sólo ha conseguido incrementado la burocracia en los centros y no reconoce al profesorado y del personal educativo complementario su implicación en esta educación para la ciudadanía.
- La dotación de plantillas necesarias y negociación de una RPT suficiente, con la cobertura de bajas y un empleo con los mismos derechos para todos.
- El insuficiente apoyo a los centros ubicados en las zonas rurales.
- El intervencionismo en la gestión de los centros, restándoles autonomía y suficiencia de recursos económicos y materiales junto con la falta de los medios personales adecuados para desarrollar sus proyectos educativos.
- La inexistencia de una formación permanente de los profesionales adaptada a las nuevas necesidades para poder atender a la diversidad del alumnado escolarizado.
- La falta de un desarrollo negociado de la FP reglada, ocupa-

cional y continúa adaptada a los nuevos retos y al Espacio Europeo de Educación Superior.

- La insuficiencia de programas específicos en la Educación Secundaria para poder atender al alumnado con mayores dificultades, especialmente al alumnado que rechaza su escolarización en los últimos años de la educación obligatoria.
- La insuficiente financiación de la que las Universidades Pública dura ya años. Por ello nuestras universidades han perdido puestos en las clasificaciones nacionales y extranjeras y no están adecuándose a los compromisos contraídos en Bolonia.

La FE-CC.OO. y la FETE-UGT consideramos necesario un cambio en la dirección de la política educativa que garantice, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Necesitamos disponer de centros públicos dignos, lo que requiere un Plan de construcciones, reforma y remodelación de los mismos, así como la dotación de materiales educativos y derecho generalizado a los libros de texto como parte del derecho a la educación.
- Aprovechar las inversiones realizadas en los centros públicos y de su profesorado y personal de servicios educativos para una mayor escolarización de alumnado, optimizando así el dinero

público, en lugar de duplicar inversiones en el sector público y privado.

- Es imprescindible un compromiso decidido con las familias que permita conciliar la vida laboral y personal, que fomente la participación de los padres y madres en los centros a la vez que ofrezca servicios de apoyo a las familias.
- Hay que garantizar la función social de la escuela con la admisión equitativa del alumnado con especiales dificultades entre todos los centros y dotarlos de la autonomía y los recursos necesarios para asegurar al máximo el éxito de todo el alumnado.
- Es preciso adquirir los compromisos financieros que garanticen un espacio adecuado para la formación profesional y para las universidades y que esté homologado con los países más avanzados de Europa.
- Hay que apoyar de forma clara a los profesionales de la enseñanza, mejorar sus retribuciones y favorecer el reconocimiento social de su trabajo.
- Hay que adoptar medidas orientadas a mejorar la convivencia en los centros, potenciando el diálogo de todos los sectores de la comunidad educativa y una mayor colaboración entre las familias y los centros educativos.

Para lograr todos estos objetivos es necesario un mayor compromiso social -y político- con la educación, es necesario invertir más y mejor en educación hasta conseguir la equiparación con los indicadores de calidad de los organismos internacionales.

Por todo ello, la FETE-UGT y la FE-CC.OO. exigen al Gobierno que resulte elegido próximamente en las urnas que deje de gastarse el dinero de todos los ciudadanos de Castilla y León en privatizaciones innecesarias y absurdas, que deje de ignorar a la comunidad educativa, que deje de fomentar la desigualdad entre los ciudadanos y ciudadanas para escoger centro. Le exigimos que presente urgentemente, a los diferentes representantes de la comunidad educativa, el calendario de implantación de la LOE, junto con las partidas presupuestarias necesarias para poder resolver los problemas señalados anteriormente y por tanto, poder ofrecer una educación de calidad todos las ciudadanas y ciudadanos de Castilla y León.

Este es el nuevo y fundamental reto para el sistema educativo que exige ser dotado financieramente. La educación es uno de los servicios públicos con mayor capacidad para generar cohesión social y económica. Los servicios públicos esenciales deben ser de gran calidad y accesibles para toda la ciudadanía. Hasta ahora, las pri-

vatzaciones o las liberalizaciones han sido las únicas alternativas propuestas para el desarrollo de los servicios públicos.

Por esta razón nuestras organizaciones están reclamando junto con la Confederación Europea de Sindicatos que haya una Ley que dé prioridad al interés general, al acceso universal a los servicios públicos, a su refuerzo para consolidar los derechos fundamentales y para dar a los servicios públicos una base jurídica sólida que los inmuniche frente a los ataques de carácter ideológico de un mercado no reglamentado. Por esta razón también es preciso hacer un llamamiento al futuro Gobierno de Castilla y León para que no haga campañas de cara a la galería, ni políticas fiscales regresivas, ni inversiones y concertaciones innecesarias con empresas privadas, y potencie de una vez por todas lo público como única garantía de equidad. Esta es la idea principal sobre la que queremos que trabaje el futuro gobierno de Castilla y León y por eso estamos aquí, dándole traslado de ella a la ciudadanía.



Más y mejor educación pública para toda la ciudadanía **4**